

18 medidas políticas
por un mundo rural y costero vivo
y por la soberanía alimentaria



PODEMOS.

18 medidas políticas por un mundo rural y costero vivo y por la soberanía alimentaria

El medio rural y costero abarca el 80% del territorio del Estado, en el que tan solo vive el 20% de la población. Es un espacio social, ecológico y económico rico y diverso, portador de inmensos valores culturales que constituyen la esencia de la diversidad de pueblos y nacionalidades que forman el Estado. Sin embargo, las sucesivas políticas implementadas desde la Administración lo han ido relegando a una realidad meramente (im)productiva, acompañada por una crisis de derechos brutal. La población del medio rural tiene un enorme sentimiento de abandono por parte de los poderes públicos, y ha sido sistemáticamente apartada del diseño de sus políticas. Las personas que viven en el medio rural tienen necesidades y demandas, son cada vez más conscientes de los saberes que atesoran y, lo más importante, tienen claro cuáles son sus reclamos fundamentales. Nuestro rural es y debe formar parte fundamental del proceso de cambio democrático y de construcción de un nuevo modelo productivo que se abre paso en este país, y ha de ser un agente clave en la vertebración del territorio y en la lucha contra la despoblación.

El futuro de la población rural exige un nuevo contrato social, la actualización urgente de derechos que, si bien están contemplados en el orden constitucional de 1978, en el contexto de la crisis están siendo amenazados y crecientemente vulnerados. Lamentablemente vuelve a ser urgente en la actualidad garantizar derechos básicos como la alimentación, el agua, la vivienda, los suministros de luz y gas y salvaguardar el gasto educativo, sanitario, en asistencia social y el gasto público en pensiones. Es necesario promover activamente un cambio del modelo productivo, con una intervención decidida del poder público frente a dinámicas altamente lesivas de los mercados desregulados e impulsar procesos de reforma que favorezcan a los de abajo. Igualmente es necesario educar en el consumo responsable y en el decrecimiento económico.

Ante los enormes retos que se abanderan en los escenarios internacionales y que supone la crisis ambiental y el cambio climático, apostar por un modelo de sostenibilidad ambiental, social y de-



mocrática implica trabajar con y para las mayorías sociales, con una estrategia de política de escucha activa que recomponga la defensa de bienes comunes y del interés público. Hay que cuestionar el privilegio, el despilfarro y la corrupción que ha orientado muchas veces el trabajo de las instituciones y las autoridades públicas, y desenmascarar las dinámicas caciquiles y clientelares que han beneficiado desde siempre a las mismas personas. Afrontar todos estos retos colectivos implica abrir un proceso de diálogo social y político lo más amplio posible para poder construir nuevos consensos sobre la sostenibilidad de nuestra biodiversidad, de nuestras raíces culturales y saberes populares, de nuestro paisaje y nuestro paisanaje, de cómo seguir desarrollando nuestra economía para mantener un mundo rural vivo.

Por estos motivos, desde Podemos e Izquierda Unida hemos dialogado para plantear de manera unitaria un conjunto de políticas y medidas para un nuevo pacto de Estado por el medio rural y marino y por el sector primario.



6 grandes políticas de Estado para un mundo rural vivo

- 1. Lucha activa contra la despoblación.** La continua sensación de soledad y aislamiento y el alejamiento de la realidad rural a la realidad empírica (políticas de despacho que ignoran continuamente la idiosincrasia del campo español) es el primer elemento de frustración que debemos enfrentar con la población rural. El fenómeno de la despoblación se agrava sobre todo en las zonas de montaña, en los municipios de menos de 5.000 habitantes y en aquellas comarcas más rurales. En más de 1.000 municipios la densidad no llega a los 10 habs./Km², y esto exige una actuación urgente. La gente joven abandona el rural debido a la falta de oportunidades de empleo, a la ausencia o precariedad de los servicios públicos y a la sensación de soledad. Planteamos una política activa contra la despoblación, que debe desarrollarse de manera articulada y contemplando el conjunto de políticas sociales y económicas. Una política que debe ser coordinada con las comunidades autónomas y el Gobierno de España, porque es una responsabilidad de todos, y no solo de los territorios más despoblados: la precarización de servicios, la ineficaz gestión de residuos, la incidencia de la contaminación... en definitiva, la masificación de las ciudades tiene mucho que ver con la despoblación de buena parte de la España rural interior. Hay que elaborar un mapa comarcal del despoblamiento en España. La política activa contra la despoblación implica incentivos y desgravaciones fiscales, criterios positivos a la hora de solicitar becas o ayudas al empleo o autoempleo, facilidades para la instalación de empresas, y debe garantizar la cohesión social y territorial, la calidad de vida de la población que vive en las zonas rurales. Implica, además, un freno en la despoblación, e incluso que se abra una política de repoblación.
- 2. Política activa de desarrollo sostenible del medio rural.** Cuando hablamos de desarrollo rural hablamos de calidad en las escuelas, de institutos con oferta educativa adecuada y de calidad, de cobertura sanitaria, de servicios de urgencia, de contar con bibliotecas y oferta cultural, pero también de tener acceso de calidad a internet, o carreteras en buen estado y transitables todo el año, de servicios de limpieza adecuada frente a las nevadas, de empleo, de incentivos para la instalación de pequeñas empresas, de conservación natural, de dinamización social y de todo aquello que constituye una estrategia de desarrollo social y económico sostenible y equilibrado, transversal y mul-



tisectorial. Reivindicamos para todo ello una política de Estado de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que lógicamente deberá estar coordinada con la actuación de las comunidades autónomas, puesto que tienen competencia sobre la materia, pero que tratará de sumar esfuerzos desde el conjunto de Administraciones implicadas, impulsando una dinámica general y positiva. Reivindicamos la activación, aplicación y desarrollo de la Ley 45/07, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Una ley que beneficia de manera potencial a un total de 10.579.281 habitantes, que residen en 7.869 municipios, y cuya aplicación se extiende a un 84,5% del territorio. La ley será un instrumento para la definición, de manera participativa y transparente, de los Planes de Zona de Desarrollo Rural, donde el conjunto de asociaciones, empresas y grupos sociales definirán las prioridades de actuación y sobre los cuales las Administraciones local, autonómica y estatal se comprometen a impulsarlos. Pero al mismo tiempo, la aplicación de esta ley debe ser coherente con el Programa Marco de Desarrollo Rural de la Unión Europea 2014-2020, financiado a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), y deberá corregir deficiencias e irregularidades detectadas con un mayor control participativo de la sociedad civil y mejores criterios de transparencia y eficacia, con el compromiso de cofinanciación de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, para, de esta manera, tener un marco financiero en el cual puedan desarrollarse de manera coherente estas políticas.

- 3. Política y estrategia de actuación contra el cambio climático y de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Desarrollar el Convenio Europeo del Paisaje.** La biodiversidad constituye una de las mayores riquezas que posee el medio rural. El 90% de la biodiversidad se encuentra en el medio rural o la zona costera. El 27% del territorio se encuentra bajo una figura de protección de la Red Natura 2000. Este patrimonio paisajístico es de toda la sociedad; por lo tanto, es nuestro deber conservarlo, protegerlo y promocionarlo de acuerdo con los compromisos internacionales que España tiene firmados. Al mismo tiempo, su valor como recurso ofrece enormes posibilidades para construir estrategias de desarrollo sostenible en el medio rural. Pero una adecuada política de conservación del patrimonio paisajístico implica reconocer que los ecosistemas naturales, tal y como los hemos conocido, son así porque han sido habitados y cuidados por la acción humana. No hay paisaje sin paisanaje. Los sistemas tradicionales campesinos han contribuido a mantenerlos en un estado saludable. Reconocer



el valor de la ganadería extensiva, del manejo forestal o de la agricultura biodiversa es importante para llevar a cabo una política coherente de conservación de los recursos. Defendemos un modelo de producción agropecuaria y un modelo pesquero sostenible y social basado en unidades productivas familiares y coherentes con esta política de conservación del patrimonio natural; incluidas las especies silvestres, los recursos genéticos tradicionales (variedades de plantas y razas ganaderas tradicionales). Queremos un medio rural donde continúen viviendo el lobo y el oso, pero también la vaca tudanca, la oveja y el pastor. Es necesario arbitrar y desarrollar políticas y estrategias de diálogo y compromiso común entre el conjunto de actores y sectores. El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 constituye el elemento fundamental de desarrollo de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este instrumento, novedoso en la legislación española, establece metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad para el periodo 2011-2017.

- 4. De una política agraria común a una política agroalimentaria al servicio de un nuevo modelo de producción social y sostenible,** sobre la base de un sector agropecuario apoyado en el máximo número de explotaciones agropecuarias extendidas por todo el territorio, y sobre la diversidad de sistemas de producción. Para lograrlo, es necesaria una revisión profunda de los postulados sobre los que se apoya la actual Política Agrícola Común (PAC), en el horizonte de la negociación del nuevo programa a partir de 2020. Para empezar, es necesario que esa revisión de la PAC defienda los valores de sostenibilidad social, territorial y ambiental, apoyando a los agricultores y agricultoras que realmente viven y trabajan en el campo y en el sector, frente a abstencionistas especuladores que hoy reciben y acumulan en España el grueso de las ayudas directas. Este apoyo directo a la pequeña producción tiene que ir acompañado de una mejora y complementación de rentas derivadas de otras posibles actividades conexas, que son coherentes en el marco del desarrollo rural que queremos (pequeña industria de transformación, labores de conservación y mantenimiento ambiental, formación, comunicación y servicios socioculturales). No podemos seguir tolerando una inmoralidad clamorosa, en la que el 18,71% de los perceptores de la PAC concentren el 76,52% de las ayudas. Mientras que el importe medio de un perceptor de PAC es de 6.319 euros, lo que constituye una ayuda muy exigua para los beneficios que reporta la actividad, hay



243 perceptores; es decir, un 0,03% que cobra cada uno una media de 1.016.474 euros al año. Esto supone que ese 0,03% de perceptores reciben más que el 45% de todos los agricultores y agricultoras que cobran la ayuda de la PAC cada año. Además, trabajaremos intensamente por impulsar una nueva PAC realmente justa y sostenible, pero mientras tanto, y hasta que llegue, proponemos aprovechar los márgenes de actuación que tienen los Estados miembros y que nuestros Gobiernos nunca han aplicado: la modulación de las ayudas, la limitación regresiva de las más altas o la eliminación de la posibilidad de cobrar ayudas por el simple hecho de tener tierra sin demostrar la actividad. Proponemos además otras medidas coherentes con la actual PAC que favorezcan la desintensificación de la producción, la mayor orientación hacia la producción ecológica o las ayudas para mejorar la adaptación al cambio climático.

- 5. Política pesquera común.** La pesca en nuestro litoral es un sector estratégico que, no obstante, tiene que avanzar en la transición hacia una pesca sostenible y en la defensa de nuestra flota artesanal, con una transformación gradual y paulatina de las artes con mayor impacto en el medio marino hacia prácticas respetuosas con los ecosistemas y la sostenibilidad. En esa línea, abogamos por un mayor y fehaciente control de las artes de arrastre (la transición de la artes romboidales a aquellas con menor número de descartes y capturas accidentales, la limitación del peso de «puertas»), por la aplicación efectiva del control de potencia de motores, redefiniendo sus espacios de pesca a distancias a la costa de 3 millas y con profundidades de 80 o 100 m, así como el escrupuloso cumplimiento de las normas europeas responsables y sostenibles, en la línea de su reconversión gradual a formas de pesca sostenible. También es necesaria la defensa de nuestro sector marisquero, de alto valor añadido, con acciones decididas contra la contaminación y los problemas medioambientales, que dejan a nuestros mariscadores y mariscadoras en tierra, hipotecando el futuro del sector y el de comarcas enteras. Es necesario revertir los intentos de privatizaciones encubiertas que divisamos en algunos territorios para defender una mar de todos. Sobre las bases del diálogo y la interlocución colectiva de todos los actores de la pesca, es necesario avanzar en la figura jurídica que permita el desarrollo de la cogestión de las pesquerías, incluyendo a todos los actores interesados (pescadores, mariscadoras, ONG, científicos, Administración...), para promover esta pesca sostenible y aplicar correctamente la política pesquera común. Se impone una redimensión en la gestión de los cupos de pesca



actuales y su reparto que permita márgenes razonables y suficientes para los ingresos dignos de todo el sector; un nuevo reparto pensado en la sostenibilidad en la producción, en los criterios de equidad y justicia económica y social para con las gentes de la mar, avanzando en un reparto efectivo de las capturas, equilibrando las artes y articulando un reparto por ratios barco/tripulación lineal e intransferible, por tripulante a bordo de cada barco a nivel estatal en condiciones de igualdad territorial. Todo ello se tiene que dar necesariamente sobre el diálogo de todo el sector, sobre las bases de la transparencia y la claridad institucional. A su vez, es necesario redirigir la utilización de los fondos de la PPC y del FEMP: los fondos para la pesca en sus diferentes partidas tienen que revertir necesaria y efectivamente en las gentes que trabajan y viven la mar.

6. Reforma de la Administración local. Autonomía local. Profundización democrática. La Administración local es la institución más cercana a quienes habitan nuestros pueblos. Las entidades locales menores —algunas de ellas todavía reguladas en régimen de Concejo Abierto— son un bien que preservar, consolidar y desarrollar debido a la labor fundamental que desempeñan en el medio rural. Los concejos abiertos son espacios de participación y cogestión comunitaria del territorio y de los recursos naturales que en ellos se encuentran (comunales). La ley Montoro, además de menoscabar la autonomía de los Ayuntamientos, elimina la capacidad de decisión y autogestión de las entidades locales menores, al usurparles su entidad jurídica. Es necesaria la derogación de La Ley de Racionalización de las Administraciones Públicas (ley Montoro).

La territorialización de la política es una de las claves para un desarrollo rural sostenible. Los planes de desarrollo deben surgir del propio territorio, para que tenga posibilidades de fructificar, por lo que debemos acercar las Administraciones al territorio y a sus pobladores. Las diputaciones no solo han sido un foco de caciquismo y clientelismo; también se han demostrado absolutamente ineficaces en la lucha contra la despoblación. Debemos plantearnos la necesidad de profundizar en el desarrollo de estructuras administrativas comarcales sobre criterios de profundización democrática, mucho más cercanos al territorio, para sustituir la figura de la Diputación provincial. Consideramos que la comarca (mejorándose experiencias ya existentes en algunas comunidades autónomas) es la herramienta que puede hacer viable la supervivencia práctica de los pequeños Ayuntamientos, mancomunando servicios y fomentando

estrategias de desarrollo conjunto. Para no cometer los mismos errores del pasado, estos organismos comarcales deberán contar con la participación y el control de organizaciones, alcaldes y paisanos, para evitar las tramas del poder. Hay que dotar suficientemente a los municipios y órganos supramunicipales para alcanzar el sistema de financiación 30%-30%-30%, derogar la ley Montoro e incluso retomar la senda para una verdadera reforma democrática de la Administración local, en la que se trate a los Ayuntamientos como «mayores de edad».

12 propuestas políticas sobre problemas concretos

- 7. Medidas para una política de tierras.** Continúa perdiéndose superficie agraria útil. En los últimos 10 años se han perdido 2,4 millones de hectáreas. Ello quiere decir que se han perdido 659 hectáreas por día. La revelación de este dato nos da muestras de la gravedad del proceso. Además, hay una muy injusta distribución de la tierra. En los últimos 10 años las explotaciones agropecuarias familiares han perdido el control sobre el 17% de la tierra; mientras tanto, tan solo 1.027 grandes explotaciones controlan el 20% de la tierra disponible en toda España. Son familias como Abelló (propietario de más de 58.000 has), la Casa de Alba (más de 37.000 has), Figueroa y Domecq (más de 25.000 has) que, a pesar de disfrutar de condiciones de alta rentabilidad, cobran grandísimas subvenciones de la PAC. Es necesario activar una política de tierras que incluya una Ley Básica para la Gestión y Gobernanza Responsable de la Tierra Agraria, que proteja el suelo agrario frente a otros usos, la especulación, y que incluya medidas positivas. Por ello, es necesario promover la aprobación de leyes de Patrimonio Público Agrario que orienten el uso que las Administraciones Públicas hacen de sus tierras, favoreciendo la creación de fondos o bancos de tierra orientados a la instalación y puesta en marcha de proyectos de valor económico y social, especialmente protagonizados por jóvenes y mujeres. La introducción de medidas que favorezcan el acceso y reparto justo a la tierra en contextos de mucha injusticia como Andalucía o Extremadura, la limitación del latifundio o la gran propiedad con medidas fiscales desincentivadoras o con medidas positivas cuando las tierras están en desuso. La implementación de medidas de control sobre el precio de la tierra y una revisión de los contratos sobre la tierra



que favorezca un uso productivo a favor de la sostenibilidad socioterritorial y ambiental y la soberanía alimentaria.

8. Una nueva política del agua. Necesitamos una gestión del agua sostenible y basada en el control de la demanda, en coherencia con el cambio climático; transparente, pública, con criterios de equidad económica y social y que garantice el buen estado de los ríos y el resto de ecosistemas acuáticos, en coherencia con la Directiva Marco del Agua. Consideramos necesario paralizar mediante decreto ley los proyectos más conflictivos: trasvases, nuevos embalses o recrecimientos de los existentes, así como de otras infraestructuras no justificadas. Siendo el regadío básico para el mantenimiento de la población y para la consolidación del modelo social y profesional de agricultura, es necesario, sin embargo, paralizar la ampliación de los regadíos contenidos en los planes hidrológicos, ya que han sido planificados sin criterios sociales, económicos y ambientales. Apostamos por una gestión adecuada que fomente el ahorro y la calidad de este recurso tan valioso. Necesitamos poner en marcha procesos de diálogo por parte de todos los sectores, los colectivos y los territorios implicados en conflictos del agua para identificar alternativas negociadas y soluciones de consenso en función de una amplia participación social, incluyendo en particular los conflictos en torno al Canal de Navarra o en torno a embalses como Mularroya, Yesa o Biscarrués, y trasvases, muy especialmente el Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó. En cuanto al agua de boca para consumo, deberíamos avanzar hacia propuestas concretas que garanticen el consumo a bajo coste, estableciendo un umbral mínimo persona/día en primera/segunda residencia, y que grabarán severamente el despilfarro de este recurso vital para la vida.

9. Estatuto de la Agricultura Social, Sostenible y Profesional. De acuerdo con el modelo que defendemos, es imprescindible la renovación de la actual Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, con el objetivo de mejorar la viabilidad económica, social y ambiental de nuestras explotaciones agropecuarias. El modelo social y profesional de agricultura es la base de la alimentación de nuestro pueblo, y contribuye decisivamente en la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como en la gestión y en la ordenación del territorio para mejorar su habitabilidad. Este modelo une a su labor esencial la producción de alimentos para la sociedad, la entrega de una serie de «bienes públicos» no remunerados: medioambientales, territoriales, culturales, gastronómicos, patrimoniales y paisa-



jísticos. Desde la aprobación de la ley han surgido nuevos retos para la agricultura social que deben ser integrados. Caracterización y priorización del modelo de agricultura social y profesional, a través de la evolución y actualización de la explotación prioritaria y del agricultor profesional. Contemplar el modelo de productor —transformador— comercializador, lo que implica tener en cuenta todo el tiempo de trabajo dedicado a estas actividades conexas, que deben contemplarse en el cálculo de la Unidad de Trabajo Agrario (UTA). Caracterización y valoración de los «bienes públicos» que el modelo de agricultura social y profesional ofrece a la sociedad. Desarrollo del contrato territorial de explotación. Creación de la figura societaria adaptada a la explotación social y profesional... Beneficios fiscales en relación con la transmisión de explotaciones, transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, instalación de nuevos agricultores, arrendamientos de tierras, inversiones en innovación, etcétera. Marco normativo y fiscal de las actividades complementarias a la actividad agraria. Regulación de la transformación y la venta directa por parte de las explotaciones agrarias.

10. Mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria de manera justa y transparente.

La cadena agroalimentaria debe ser rentable y sostenible en su conjunto, y para ello hay que acabar con el abuso de posición de dominio, repartiendo el valor creado de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores, y asequibles para los consumidores. El valor que aportan a la economía los tres pilares básicos de la cadena alimentaria (agricultura, ganadería y pesca, industria y distribución) está muy equilibrado —en torno a un tercio cada sector—, sin considerar a estos efectos los bienes públicos que a mayores aporta el sector agropecuario en cuanto a sostenibilidad territorial y medioambiental. Sin embargo, la relación entre dichos eslabones está totalmente desequilibrada, con evidentes posiciones de dominio, desigualdades y abusos en el poder de negociación, prácticas abusivas... que producen graves distorsiones en el mercado, comprometen las rentas y el futuro del eslabón más débil, el sector agropecuario, y no garantizan la debida transparencia a los consumidores. Por eso proponemos la mejora de la aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, sobre criterios de mayor transparencia y participación de todos los productores y transformadores implicados en los diferentes eslabones según elementos de equidad democrática y



conservación de población en el medio rural. Por otra parte, es necesaria la coordinación entre las autoridades competentes para el correcto funcionamiento de la ley, en el ámbito de la misma. Aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). La AICA tiene asignadas un buen número de competencias, y su papel es determinante en la correcta aplicación de la ley. Consideramos necesaria la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena. La actual ley establece excepciones, basándose, por ejemplo, en el tamaño de los operadores o en el carácter perecedero de los productos, lo que resta efectividad a la misma. Los contratos no corrigen por sí solos los desequilibrios existentes en la cadena, pero aportan transparencia y seguridad jurídica, y la ley sería más efectiva si fuera igual para toda operación y para todo operador. Es necesario, además, eliminar las prácticas abusivas de venta a pérdidas, compra a pérdidas, producto reclamo, y controlar el plazo de los pagos. Por último, es necesario que el Observatorio de la Cadena Alimentaria, junto con la figura del defensor o defensora de la cadena, actúen en coordinación con el Tribunal de la Competencia para erradicar progresivamente las prácticas abusivas que actualmente imperan.

- 11. Mejorar la renta agraria, garantizar precios justos y remuneradores y controlar los costes de producción.** De partida, la realidad es que los productos agrarios y ganaderos en origen pagados a los y las productoras no cubren en ningún caso los costes de producción. La cadena agroalimentaria concentra el poder cada vez más en la gran distribución, que impone los precios a lo largo de todos los eslabones de la cadena. El caso de la leche es un ejemplo reciente: mientras que los productores están recibiendo por parte de la industria un precio en torno a 0,28 céntimos de euro el litro, el precio de equilibrio está en 0,34 céntimos. Esta realidad se extiende a todos y cada uno de los productos. El índice de precios en origen y destino que mes a mes se hace público vuelve a mostrar cómo existe un incremento general de los precios pagados al agricultor al consumo que se multiplica por 3,62 veces, es decir, que se incrementa en un 362%. Esto, traducido a ejemplos reales, significa que, mientras que un kilo de manzanas es pagado al agricultor a 0,55 euros/kg, el consumidor paga por él 1,76 euros/kg. La política de precios remuneradores debe estar dentro de la mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria. La renta agraria sigue la senda del descenso, y ha acumulado entre los años 2004 y 2014 el 27% de caída, mientras que los consumos

intermedios se han encarecido en un 39,13%. Se hace imprescindible una serie de actuaciones, como una fiscalidad adecuada a la renta y rendimiento, que favorezca la producción de bienes comunes y que aumente sobre el sector más intensivo y contaminante; un IVA acorde con el valor social y ambiental de los bienes que produce, exenciones y bonificaciones en función del titular de la explotación y del lugar de su ubicación. De igual forma, es necesario el desarrollo de un Plan Especial de Desarrollo de Energías Renovables en el Sector Agropecuario, basado en la aplicación de tecnologías que permitan cerrar el ciclo productivo de la agricultura y la ganadería, fomentando el autoconsumo en las explotaciones y contribuyendo a la mitigación y adaptación del sector primario al cambio climático.

- 12. Es necesaria y urgente la flexibilización del paquete higiénico sanitario** para apoyar el desarrollo de circuitos cortos de comercialización, y apoyo al emprendimiento agroalimentario artesanal. La Comisión Europea desarrolló a través de los Reglamentos 852/2004, 853/2004 y 854/2004 el paquete higiénico sanitario. Estos reglamentos establecen numerosas excepciones y posibilidades de flexibilización en función del carácter artesanal, la venta directa, el tamaño de las explotaciones, el volumen de la producción, la caracterización como producto con algún nivel de protección geográfica y otras cuestiones enfocadas de manera directa a apoyar la pequeña producción campesina artesanal, que precisamente es la que más se desarrolla entre la juventud emprendedora del medio rural y que mayor potencialidad tiene en los escenarios de desarrollo rural. La comisión deja la posibilidad a los Estados miembros de desarrollar estas excepciones y, mientras que países como Austria, Italia, Francia o Alemania lo han hecho, el Estado español no lo ha puesto en marcha. Este es un reclamo del conjunto del sector. En los últimos años, muchas comunidades autónomas han tratado de desarrollar normativas específicas que favorecen este aspecto, pero sus intentos no terminan de ser eficaces, debido al inmovilismo de la legislación básica del Estado, recogida entre otras normas en el RD 191/2011, del Registro General Sanitario. Los sistemas de autocontrol y las guías de buenas prácticas desarrolladas en algunos casos muestran un camino adecuado, pero nosotros abogamos por la generalización de sistemas de control que sean aplicables en todo el territorio del Estado.



13. Favorecer la instalación de los jóvenes en el campo y en el sector agropecuario y pesquero.

En el año 2010, según datos de la Comisión Europea, solamente el 5,3% de los agricultores españoles se encontraban por debajo de los 35 años de edad, mientras el 55,3% sobrepasaba los 55 años. Analizando los datos del FEGA relativos a las ayudas directas percibidas por los agricultores y ganaderos en el ejercicio 2012, solamente el 3,4% de los beneficiarios tienen menos de 35 años, mientras el 63,4% de los perceptores tienen 55 años o más. Paralelamente, existe una realidad dramática: el desempleo juvenil, que se sitúa en el 57,4 % de los menores de 25 años y que en el medio rural asciende al 62%. En relación con esto, conviene subrayar que, según datos de Eurostat, por cada joven que se incorpora al sector agrario se generan ocho empleos indirectos en el medio rural. Esta alta tasa de paro juvenil, junto con la ausencia de alternativas laborales en las zonas rurales y el potencial de crecimiento del sector agroalimentario español, ha provocado una situación sin precedentes en el sector agrario: en el periodo 2012-2013, las solicitudes de incorporación de jóvenes al sector agrario se han incrementado un 79%; sin embargo, no existe una adecuación de las políticas y medidas para dar respuesta a esta creciente demanda. Es necesario priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes en los nuevos Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen que aplicar las comunidades autónomas. También es necesario mejorar la coordinación con otras medidas de los programas de desarrollo rural que puedan ser solicitadas por los agricultores jóvenes (agroambientales, indemnización compensatoria, asesoramiento, etc.), así como el fomento de los servicios de asesoramiento, priorizando el acceso a los mismos de los nuevos agricultores y agricultoras, con el objetivo de mejorar la gestión técnica, económica y medioambiental de sus explotaciones. Y facilitar el acceso a la tierra en venta y arrendamiento para los agricultores jóvenes, ya que es un obstáculo muchas veces insalvable al que se enfrentan cuando planifican su incorporación. Hay que mejorar el acceso de los agricultores jóvenes a las reservas de derechos de ayuda, a los derechos de plantación y a los derechos de cuota, y facilitar el acceso a la vivienda de los agricultores jóvenes que viven en el medio rural. Es necesario establecer beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria ganadera o pesquera durante los cinco años que dura el proceso de instalación, y mejorar el acceso a la financiación a todos los jóvenes profesionales y autónomos del campo, facilitando el crédito, de forma especial, a través de mecanismos públicos.



14. Nuestro mundo rural, tanto como sector productivo como espacio de desarrollo social, no puede seguir construyendo sin contar con la mitad de la población. Es necesario introducir criterios de género, una mirada de género, una mirada feminista que nos permita establecer medidas que comprendan la realidad social de nuestras zonas rurales, dotar de recursos (educativos, sanitarios) que propicien la conciliación. Que se entienda la generación de riqueza rural no solo desde los sectores primarios en asuntos económicos, políticos y de cohesión territorial sería la clave para alcanzar un medio rural adaptado al desarrollo integral de las mujeres. Son las mujeres quienes, desde el cuidado, ya de la tierra, ya de las personas, han sacado el medio rural adelante. La Ley de Titularidad Compartida no ha dado los resultados esperados. Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de desarrollar este derecho para las mujeres, y sin embargo no lo han hecho, por lo que se hace necesaria una revisión profunda de la ley y del sentido de sus medidas. Por otro lado, las violencias machistas se reproducen de forma silenciosa, y al mismo tiempo se ocultan con mayor profundidad, sin que existan los medios de apoyo ni servicios básicos que permitan a las mujeres denunciarlas con garantías. El aislamiento geográfico de las mujeres hace que se vean imposibilitadas para acceder a los recursos públicos y denunciar o buscar apoyo psicológico. A la vez, el hecho de que sean comunidades pequeñas, donde el anonimato prácticamente no existe, hace muy difícil que se pueda salir de esta dramática situación. La falta de empleo también aboca a muchas mujeres a permanecer con sus agresores por falta de independencia económica, y todo ello debe ser estudiado y solucionado por las instituciones. De igual forma, es crucial un desarrollo en La Ley de Dependencia en el Medio Rural que contemple la situación real en la que se encuentran las mujeres cuidadoras, que acaban sosteniendo toda la pirámide poblacional, y que resuelva su actual disfuncionalidad, que hace que el peso del cuidado siga recayendo, como históricamente ha recaído, sobre ellas. El reconocimiento de esta situación es imprescindible para empezar a reestructurar las relaciones dentro de la familia y la comunidad. Es prioritario poner en marcha y ejecutar actuaciones para fomentar la igualdad de género, siguiendo las directrices de la propia ONU, en cuya revisión del informe CEDAW en 2015 ha evaluado la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en España.



15. Favorecer y promover la ganadería extensiva y los sistemas tradicionales de pastoreo.

La ganadería extensiva es una de las herramientas más eficaces para la creación y el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural, ya que genera productos de alta calidad y elevados beneficios sociales y ambientales, y potencia, conserva y promueve la biodiversidad, ayudando a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, y facilitando el cumplimiento de los compromisos internacionales desarrollados a través de la normativa europea. Sin embargo, la incomprensión de nuestros sistemas ganaderos por parte de las políticas europeas, y un enfoque inadecuado de las políticas españolas, están poniendo en peligro su viabilidad, contribuyendo al abandono y a la ruina del sector. Planteamos la necesidad de elaborar una normativa estatal reguladora específica para dar cobertura a un Plan Estratégico para la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo. Esta estrategia debe ser diseñada y consensuada por el propio sector y por las diferentes instituciones y organizaciones que lo apoyan, y debe estar adecuadamente dotada con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su puesta en funcionamiento. El objetivo consiste en garantizar un escenario de futuro viable para la ganadería extensiva, potenciando sus aspectos clave, económicos y de rentabilidad, por supuesto, pero también los sociales, culturales y ambientales. Este plan debe servir para mejorar la posición de la ganadería extensiva en la Política Agraria Común (PAC), integrando de forma eficiente los pilares 1 y 2 de la PAC. Respecto al primero, una cuestión primordial es el reconocimiento de los sistemas ganaderos basados en pastos leñosos como superficies elegibles (en función de su uso ganadero real, ya recogido en la definición de la actividad agrícola del pilar 1), dotados de una admisibilidad adecuada. Entre los segundos, el desarrollo de medidas agroambientales específicas en los programas de desarrollo regional. Además, es necesario recuperar el contenido del Libro Blanco de la Trasmancia, y definir actuaciones para la recuperación posesoria de las vías pecuarias. Son elementos de un patrimonio público histórico que deberían gozar de una adecuada protección legal garantizada desde las Administraciones Públicas.

16. No al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la UR y EE. UU. (TTIP).

El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad. Es un ataque a nuestra soberanía como país, y en concreto a nuestra soberanía alimentaria. Al plantear un cambio del marco regulatorio europeo en aspectos



tan sensibles como la seguridad alimentaria, las denominaciones de calidad o las normas medioambientales, los agricultores y agricultoras europeos lo entendemos inasumible. En cuanto a la agricultura, estos tratados contienen unas claves que ahondan la pérdida de soberanía alimentaria (capacidad de los países para establecer políticas agrarias y alimentarias propias). Además de la eliminación de los aranceles, eliminan normativas básicas en materias sociales, medioambientales, sanitarias, alimentarias y laborales, además de privatizar los servicios públicos, que son derechos determinantes para el conjunto de ciudadanos de ambas partes del Atlántico. Estos tratados incluyen herramientas que afectan a las regulaciones, las normas y las políticas públicas como son el Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS) y el Consejo de Regulación Compensatoria. Dichos instrumentos estarían a disposición de las empresas transnacionales para desactivar las políticas públicas de los Estados, regiones o comunidades que pudieran ser lesivas para sus intereses. El interés público queda relegado frente al poder arrollador de los intereses comerciales multinacionales, dominados por élites globales. Nos enfrentamos a un cambio en el modelo de sociedad.

- 17. Proteger la biodiversidad cultivada y las variedades de semillas y razas autóctonas, y prohibir de manera definitiva el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM, transgénicos).** Reivindicamos el acceso a los recursos genéticos para mantener y crear una biodiversidad agrícola más amplia, cuestionando las restricciones que establecen los derechos de propiedad intelectual para semillas y material de reproducción vegetal. Hay que velar por que la integridad de estos recursos genéticos no se vea comprometida por la diseminación de OGM. Reivindicamos también el respeto del derecho de los agricultores para utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas. Este derecho que emana de nuestra propia soberanía como pueblo debe quedar fuera del ámbito de aplicación de esta legislación. Los agricultores que hacen venta directa de semillas como complemento de su actividad deben estar exentos de las mismas exigencias que el resto de operadores. Las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales necesitan reglas adaptadas a su actividad, completamente diferente a la que realizan las grandes empresas de semillas. Se necesitan reglas adaptadas para el registro de las variedades de la agricultura ecológica y de la agricultura a pequeña escala. De igual forma, las personas agricultoras y consumidoras deben tener la posibilidad de elegir los



alimentos que consumen y las plantas que cultivan. Demandamos transparencia en los métodos de selección utilizados para generar las variedades y la propiedad intelectual que gestiona su uso. Esta información debe constar obligatoriamente en el etiquetado. De la misma manera, con la próxima modificación prevista de la Directiva 2001/18/CE existe la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OGM en su territorio, lo que dará la posibilidad a los Estados miembros de restringir o prohibir el cultivo de transgénicos. Por este motivo, instamos a tomar las medidas necesarias para prohibir definitivamente el cultivo y la experimentación con OGM en nuestro territorio. Mientras tanto, exigimos el cumplimiento de la Directiva 18/2001 CE y la creación de un registro público con la localización exacta de las parcelas donde se cultivan dichos OGM. Por último, es necesario que se regule la responsabilidad sobre los daños en la salud y el medio ambiente y sobre las contaminaciones de OGM. Sectores como la apicultura y agricultura ecológica están hoy absolutamente desprotegidos, ante la imposibilidad de salvaguardar sus producciones de las contaminaciones por transgénicos.

- 18. Garantizar una protección social justa en el campo, tanto para los y las eventuales del campo como para agricultores, y de manera especial para las mujeres.** Además de los agricultores y agricultoras a título principal, en España hay en torno a 1.000.000 de eventuales del campo; de ellos cerca de 500.000 residen en Andalucía. Es uno de los colectivos laborales más desprotegidos y con salarios más bajos. Es evidente que el sector agropecuario reúne elementos de especialidad que es necesario tener en cuenta al elaborar el diseño del sistema de protección. En todo caso, la orientación debe ir encaminada a mejorar las condiciones de trabajo y protección social de las personas, aunque desde hace años los sucesivos Gobiernos han incrementado únicamente la base de cotización de manera artificial y la cuota a pagar, sin analizar la tendencia de la renta agraria, los salarios en el campo y el empleo real existente. A raíz de esto, el sistema de protección social que surge es tremendamente complejo, y da como resultado situaciones de grave injusticia y dependencia en un sector económico que atraviesa enormes dificultades. Además, partimos de una situación deficitaria del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) ante la existencia de una elevada población de jubilados frente a una caída de los activos. Sin embargo, se considera que, al tratarse de uno de los colectivos menos protegidos, es adecuada y justa una posición solidaria del sistema para un colectivo que hace medio siglo suponía el 40% del sis-





tema productivo nacional y que ha transferido mano de obra a otros sectores. Proponemos, por un lado, la revisión completa del régimen de la Seguridad Social para adecuarlo a la realidad económica de renta y salario, tanto de agricultores y agricultoras como de los y las eventuales del campo, lo que implica entre otras cosas adecuar las bases de cotización y las cuotas de una manera real a la renta y salario. Es necesario adecuar una cuota como agricultor o agricultora a título principal que sea progresiva y vaya acorde a los ingresos; es necesario equiparar la protección social a la del resto de los sectores laborales, sin que implique ampliaciones en la base de cotización ni extensiones del tiempo de trabajo que no se adecuan a la realidad del sector. Es necesario unificar la renta agraria y el subsidio en una única prestación social por desempleo en el campo. Por otro lado, si bien la ley de titularidad compartida inició un camino para equiparar las condiciones sociales de las mujeres agricultoras en la explotación familiar y para dejar de considerarlas solo como ayuda familiar, no ha conseguido, sin embargo, el efecto esperado. Es necesario buscar soluciones reales a un problema que provoca que decenas de miles de mujeres que llevan trabajando en el campo, en su explotación familiar, finalmente no cuenten siquiera con una jubilación. Además, es necesario reordenar las relaciones laborales en el campo de la mano de un Convenio General Básico para todas las campañas que establezca las condiciones básicas y acuerdos de mejora en cada campaña. Por todo ello, resulta básico reactivar y dinamizar la mesa sectorial de relaciones laborales en el campo, en el marco del Ministerio de Trabajo, con la reunión del conjunto de los actores sociales implicados.

